

Pobreza y desigualdad: análisis de brechas

Andrés Mideros Mora*

Pontificia Universidad Católica del Ecuador
amideros060@puce.edu.ec
<https://orcid.org/0000-0001-9333-3565>

Carolina Sánchez Pilco**

Pontificia Universidad Católica del Ecuador
asanchez679@puce.edu.ec
<https://orcid.org/0009-0006-3229-3604>

Introducción

La pobreza y la desigualdad en Ecuador son fenómenos que no pueden entenderse coyunturalmente ni a nivel de individuos, sino desde las manifestaciones que responden a las estructuras económica, social e institucional del país. Estas estructuras, que han evolucionado a lo largo del tiempo, perpetúan dinámicas de exclusión, dependencia y baja productividad que afectan especialmente a pueblos y nacionalidades indígenas y afrodescendientes, mujeres y trabajadores informales (Mideros *et al.*, 2024).

La estructura económica del Ecuador se caracteriza por una dependencia de la extracción de petróleo y la exportación de productos agrícolas, como el banano, las flores, el cacao y el camarón. Según Sachs y Andrew (1995), este modelo extractivo genera dependencia económica, baja productividad en otros sectores y vulnerabilidad

* Doctor en Economía y Análisis de Políticas Públicas por la Universidad de Maastricht, con una destacada trayectoria como consultor internacional, funcionario de la ONU y exministro de Planificación y Desarrollo. Actualmente, es Vicerrector de Docencia y Estudiantes en la PUCE y Homólogo en la Red de Desigualdad y Pobreza de AUSJAL.

** Economista por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y licenciada en Economía y Gestión por la Universidad de Grenoble Alpes en Francia. Técnico docente del Instituto de Investigaciones Económicas de la PUCE y miembro de Rethinking Economis Ecuador.

frente a las fluctuaciones del mercado global, ya que los países que se especializan en la exportación de productos primarios enfrentan ciclos de precios volátiles que limitan su capacidad de planificar el desarrollo a largo plazo. En Ecuador, la dependencia del petróleo ha sido un factor clave en la configuración de su economía. Cuando los precios del petróleo son altos, el país experimenta períodos de crecimiento económico, pero cuando los precios caen, la economía se contrae con rapidez, afectando especialmente a los sectores más pobres y vulnerables que dependen de servicios sociales que se financian con ingresos petroleros (Acosta, 2006).

Este tipo de estructura económica extractivista reproduce una lógica de enclave, donde la riqueza generada por la explotación de recursos naturales no se distribuye de manera equitativa. Por ejemplo, Larrea (2014) subraya que “la extracción petrolera en la Amazonía tiene la estructura de un enclave, con escasas vinculaciones productivas y de consumo con la economía local”. Este modelo limita significativamente las oportunidades de desarrollo local, ya que la mayor parte del excedente generado por la actividad petrolera no se reinvierte en la zona. Las áreas donde se extrae petróleo, como las provincias amazónicas de Sucumbíos y Orellana, continúan siendo de las más pobres del país.

Por su parte, la agricultura, que es un sector clave para la economía ecuatoriana debido a su importante participación en las exportaciones, enfrenta problemas significativos de productividad, concentración de tierras y desigualdad en el acceso a los recursos. En el Ecuador, la Agricultura Empresarial (AE), aunque representa solo el 15 % de las Unidades de Producción Agrícola (UPAs), controla el 80 % de la tierra y el 63 % del agua destinada al riego. En contraste, la Agricultura Familiar Campesina (AFC), que representa el 84,5 % de las UPAs, tiene acceso limitado a los recursos, con solo el 20 % de la tierra y el 37 % del agua para riego (FAO, 2012). Esta disparidad en el acceso a los recursos contribuye a la baja productividad, lo que perpetúa la pobreza en las comunidades rurales, especialmente entre los pequeños agricultores y las comunidades indígenas (Martínez, 2013).

Además, la baja productividad del sector agrícola en muchas provincias rurales de Ecuador es una manifestación de la estructura económica desigual del país. La agricultura de subsistencia, prevalente en muchas comunidades indígenas y rurales, no ofrece las mismas oportunidades de desarrollo que los sectores más avanzados de la economía, lo que refuerza las disparidades económicas y sociales (Banco Mundial, 2020). Stiglitz (2013) argumenta que la falta de inversión en sectores productivos de alto valor añadido mantiene a las economías en desarrollo atrapadas en una trampa de pobreza, donde los trabajadores rurales, en su mayoría indígenas y afrodescendientes, se encuentran en empleos mal remunerados y de baja productividad.

Por su parte, Mideros *et al.* (2024) destacan que la estructura económica de Ecuador ha permanecido prácticamente inalterada desde el primer boom petrolero, con marcadas diferencias entre sectores. Los sectores de agricultura, ganadería y pesca, junto con comercio y transporte, concentran el 52 % del empleo en promedio entre 2012 y 2022, pero solo aportan el 26 % del valor agregado bruto (VAB). En contraste, los sectores como petróleo, minas y servicios financieros, que absorben apenas el 1,4 % del empleo, generan el 10,5 % del VAB, lo que evidencia una profunda brecha de productividad entre los sectores que concentran empleo y aquellos que concentran riqueza.

La estructura del empleo concentrada en sectores de baja productividad tiene importantes repercusiones para la economía ecuatoriana. En primer lugar, se reduce el valor añadido por trabajador, lo que se traduce en salarios más bajos y un menor crecimiento económico. Además, esto incrementa las disparidades en los ingresos, ya que los trabajadores en sectores menos productivos reciben remuneraciones significativamente más bajas que aquellos en sectores más productivos (Stiglitz, 2013). La estructura económica del país, en la que los sectores que concentran empleo son poco productivos, perpetúa las disparidades económicas y sociales, afectando especialmente a los trabajadores en agricultura y comercio (Mideros *et al.*, 2024).

La informalidad es otro factor agravante, y una característica del mercado laboral ecuatoriano. Muchos trabajadores en sectores de baja productividad carecen de acceso a seguridad social, lo que incrementa su vulnerabilidad. En contraste, los sectores más productivos, como el petróleo y los servicios financieros, presentan mayores niveles de formalidad, aunque incluso en estos sectores, un porcentaje significativo de trabajadores no tiene acceso a seguridad social (Mideros *et al.*, 2024).

Por otro lado, la pobreza y la desigualdad también están profundamente arraigadas en divisiones sociales que tienen raíces históricas y perpetúan la exclusión de ciertos grupos, particularmente las poblaciones indígenas y afrodescendientes, quienes enfrentan barreras estructurales que limitan su acceso a empleo, educación y servicios básicos. La herencia colonial se manifiesta en una jerarquía social y racial que sigue moldeando las oportunidades de desarrollo económico y social. Como lo planteaba Galeano (1971), el colonialismo no solo explotó los recursos naturales, sino que también dejó un legado de discriminación racial y exclusión.

El racismo no solo persiste en Ecuador, sino que se institucionaliza. La pobreza multidimensional es significativamente más alta entre las poblaciones indígenas, montuvias y afrodescendientes en comparación con la población blanca-mestiza. Según los datos del INEC (2023), la pobreza entre la población indígena alcanzó el 80,64 %, mientras que entre los montuvios y afrodescendientes fue del 60,03 % y 44,44 %, respectivamente, lo que refleja la persistente brecha racial en el acceso a oportunidades económicas y sociales.

El racismo estructural no solo afecta la distribución de recursos, sino también el acceso al mercado laboral, generando una doble condicionalidad de origen que reproduce la desigualdad. El sector económico en el que trabajo condiciona mi bienestar, pero el sector económico en el que trabajo está condicionado por quién soy. Las poblaciones indígenas y afrodescendientes están sobrerrepresentadas en sectores informales y de baja productividad, como la agricultura de subsistencia. Según Mideros *et al.* (2024), la población indígena está sobrerrepresentada en el sector de agricultura, ganadería y pesca, mientras que está excluida de otros sectores de la economía, como actividades profesionales, administración pública y servicios sociales. Además, destacan que, dentro de este sector, la población indígena tiene una inclinación significativa hacia el empleo informal, alcanzando un 93,47 %, en comparación con el promedio nacional de 78,75 %.

La desigualdad en el Ecuador se relaciona con aquello que Piketty (2014) argumenta en cuanto a que la acumulación de capital y las oportunidades económicas tienden a concentrarse en manos de las élites, mientras que los grupos históricamente excluidos quedan relegados a sectores con menos acceso a beneficios económicos. Esta dinámica refuerza las desigualdades intergeneracionales. Las barreras para acceder a empleo formal y bien remunerado perpetúan la pobreza entre las comunidades indígenas y afrodescendientes. La segregación racial y económica en Ecuador es una manifestación de estas estructuras coloniales que, a pesar de los avances en derechos, continúan limitando el desarrollo de los sectores más vulnerables de la sociedad.

En este contexto de desigualdad estructural, el análisis desde la economía feminista permite ampliar el entendimiento de las dinámicas de explotación. La explotación del tiempo y los cuerpos de las mujeres, particularmente en el ámbito del trabajo de cuidados no remunerado, es un elemento central para entender la reproducción de la desigualdad. Las mujeres, especialmente las indígenas y afrodescendientes, enfrentan barreras adicionales en el mercado laboral. En Ecuador, de acuerdo con Mideros y Fernández (2021) “por cada 100 horas de trabajo no remunerado del hogar (TNRH), las mujeres ecuatorianas mayores de 12 años realizaron 77, dedicando, en promedio, 31 horas de actividades de TNRH a la semana versus las 11.3 horas de los hombres”. Además, la ENEMDU anual de 2023, indica que el 33,81 % de las mujeres indígenas se dedican al trabajo no remunerado, incluyendo el cuidado de niños, ancianos y personas enfermas, lo que limita su capacidad para participar en el mercado laboral formal. Este trabajo de cuidados es esencial para la reproducción social y económica, pero sigue siendo invisible y desvalorizado, lo que perpetúa la subordinación económica de las mujeres. Federici (2012) sostiene que el trabajo de cuidados es uno de los pilares invisibles del capitalismo moderno, donde las mujeres, y en particular las más pobres, soportan el peso de mantener la economía funcionando sin recibir el reconocimiento o la remuneración adecuada.

La doble carga de trabajo que enfrentan las mujeres en Ecuador, donde además de trabajar en empleos informales o mal remunerados deben asumir las responsabilidades del hogar, refuerza su vulnerabilidad económica. Los datos muestran que las mujeres ganan en promedio un 15 % menos que los hombres (INEC, 2023), y esta brecha salarial es aún mayor entre las mujeres indígenas, montuvias y afrodescendientes. La economía feminista señala que esta explotación del tiempo y los cuerpos de las mujeres es central para comprender las dinámicas de pobreza en el país, donde las mujeres enfrentan barreras estructurales tanto en el mercado laboral como en el ámbito doméstico, lo que perpetúa la desigualdad de género (Fraser, 2013).

Estas dinámicas de explotación están intrínsecamente vinculadas al machismo y la violencia de género, que está profundamente arraigado en la cultura ecuatoriana. Los datos del INEC (2019) muestran que en Ecuador 65 de cada 100 mujeres han experimentado al menos un episodio de violencia de algún tipo en diferentes ámbitos a lo largo de su vida. La violencia contra las mujeres afecta directamente su capacidad para salir de la pobreza. Las mujeres que son víctimas de violencia suelen tener que abandonar sus empleos o sus estudios, lo que refuerza su dependencia económica y perpetúa el ciclo de pobreza (OMS, 2021). La violencia de género es, por tanto, no solo una manifestación de la desigualdad de género, sino también un mecanismo que refuerza la exclusión económica y social de las mujeres, especialmente las más vulnerables. En Ecuador, la violencia de género es un reflejo de las desigualdades estructurales que atraviesan tanto el ámbito doméstico como el laboral, lo que limita las oportunidades de desarrollo de las mujeres y perpetúa la desigualdad.

En este marco de desigualdades estructurales, los movimientos sociales, en particular los movimientos sindicales, campesinos, indígenas y feministas, han desempeñado un papel crucial en la lucha por la justicia social y económica en Ecuador (Massal, 2000). Estos movimientos han sido fundamentales para denunciar las dinámicas de explotación que sufren sus comunidades y resistir las lógicas de exclusión que impone el modelo económico y social.

Los pueblos indígenas, en particular, han liderado protestas contra las políticas económicas que han incrementado el costo de vida, como la eliminación de subsidios a combustibles, así como contra la explotación de recursos naturales en sus territorios. Estas movilizaciones también responden a la persistente desigualdad, la exclusión social, y la defensa de sus derechos territoriales, exigiendo mejoras en las condiciones de vida y mayor inclusión en la toma de decisiones que afectan sus comunidades (Larrea, 2004).

Los movimientos sindicales, por su parte, han sido actores esenciales en la defensa de los derechos laborales y en la lucha por mejores condiciones de trabajo, especialmente en sectores como la agricultura y la industria, donde las condiciones son más precarias. Estos movimientos han enfrentado las dinámicas de explotación

en el mercado laboral y han demandado una distribución más justa de los beneficios del trabajo, denunciando la precarización y la falta de acceso a la seguridad social (Arellano, 2022).

Finalmente, los movimientos feministas han sido protagonistas en la denuncia de múltiples formas de violencia y opresión que afectan a las mujeres en Ecuador. A lo largo de los años, han luchado no solo contra la explotación del trabajo no remunerado, sino también contra el acoso sexual, la violencia de género y los femicidios. El acoso sexual en los espacios laborales y públicos sigue siendo una barrera importante para la participación plena de las mujeres en la sociedad, mientras que los femicidios, que son el acto más extremo de violencia de género, se han convertido en un problema alarmante en el país (Santillán y Aguinaga, 2012). Estas luchas feministas también abordan las intersecciones de género, clase y etnia, enfatizando cómo las mujeres indígenas y campesinas enfrentan una doble o triple carga de discriminación.

Como un tercer elemento, la debilidad institucional se presenta en Ecuador como otro de los factores estructurales que contribuyen a la perpetuación de la pobreza y la desigualdad. Esta fragilidad se manifiesta en la incapacidad del Estado para proporcionar servicios públicos de manera equitativa y eficiente, lo que afecta desproporcionadamente a las poblaciones más vulnerables, incluyendo a los pueblos indígenas, afrodescendientes y las comunidades rurales. Según Acemoglu y Robinson (2012), las instituciones políticas y económicas inclusivas son esenciales para el desarrollo equitativo de una nación; en el caso ecuatoriano, la falta de estas instituciones inclusivas ha perpetuado la exclusión social. Según el INEC (2023), mientras el acceso a agua potable en zonas urbanas alcanza el 95,89 %, en zonas rurales llega al 42,86 %, lo que refleja una disparidad significativa en la cobertura de un servicio fundamental. Esta provisión desigual de servicios esenciales, como educación, salud, seguridad y acceso a infraestructura básica, profundiza las brechas sociales y económicas.

Uno de los ejemplos más evidentes de esta desigualdad en la provisión de servicios es el sistema de salud. Las zonas urbanas y más desarrolladas del país cuentan con mejores infraestructuras hospitalarias y mayor acceso a profesionales de la salud, mientras que las regiones rurales y marginales carecen de atención médica adecuada. Esto refleja lo que Farmer (2003) denomina “violencia estructural”, en la que la carencia de servicios básicos esenciales, como la atención médica, constituye una forma de perpetuación de la pobreza y vulnerabilidad social. Según el INEC (2022), mientras que en Pichincha la tasa de mortalidad materna es de 15,2, en provincias como Bolívar y Esmeraldas esta cifra se eleva a 94,5 y 93,4, lo que evidencia las disparidades en el acceso a servicios de salud y sus impactos directos en la población más vulnerable.

Otro aspecto clave de esta debilidad institucional es el acceso desigual a la educación. Amartya Sen (1999) argumenta que el desarrollo debe ser entendido como

un proceso de expansión de libertades, y la educación es una de las principales herramientas para garantizar esas libertades. Sin embargo, en Ecuador, las zonas urbanas cuentan con mejores infraestructuras educativas y docentes capacitados, mientras que las zonas rurales enfrentan carencias significativas en términos de acceso, calidad y recursos pedagógicos. Según el INEC (2023), la tasa de analfabetismo en zonas rurales es del 12,14 %, casi el triple de la tasa en las zonas urbanas (3,65 %). Las comunidades indígenas y montuvias, así como las áreas rurales en general, sufren las consecuencias de un sistema educativo que no atiende sus necesidades culturales y lingüísticas, lo que refuerza la exclusión y limita las oportunidades de desarrollo.

Esta desigualdad en la provisión de servicios también se refleja en el acceso a la seguridad, un tema particularmente crítico en el contexto actual del país. La incapacidad del Estado para garantizar la seguridad pública de manera efectiva ha llevado a un aumento en los índices de criminalidad y violencia en muchas provincias, especialmente en provincias con altos niveles de pobreza y desigualdad. Galtung (1990) define la “violencia estructural” como la forma en que las estructuras sociales impiden que las personas cubran sus necesidades básicas, y en el caso ecuatoriano, la violencia estructural se manifiesta en la incapacidad del Estado para proveer seguridad y servicios básicos, afectando desproporcionadamente a las comunidades más vulnerables. Según el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (2023), Ecuador ha registrado un incremento del 574,30 % en los homicidios intencionales desde 2019. Para finales de 2023, se reportaron 8004 muertes violentas, lo que sitúa la tasa de homicidios en 47,25 por cada 100 000 habitantes. Las zonas que experimentan mayor violencia con respecto a su población incluyen las provincias de Los Ríos, Guayas, Esmeraldas y El Oro.

El crecimiento del narcotráfico y el crimen organizado en Ecuador ha exacerbado esta debilidad institucional, particularmente en zonas fronterizas y en áreas estratégicas del país, donde el control estatal es limitado. Las provincias previamente mencionadas han visto un incremento alarmante en los índices de violencia, con tasas de homicidios y delitos relacionados con el narcotráfico en ascenso. Collier (2007) argumenta que la inseguridad no solo afecta directamente la calidad de vida de las personas, sino que también frena el desarrollo económico, al desalentar la inversión y limitar las oportunidades de crecimiento local. La violencia, además, impacta de manera desproporcionada a los sectores más vulnerables, quienes, al carecer de los recursos para protegerse o migrar, quedan atrapados en un ciclo de inseguridad y pobreza.

Los casos de México y Colombia ilustran cómo la inseguridad y el aumento de la violencia son el reflejo de la debilidad institucional, la ausencia de servicios públicos adecuados, y el abandono del Estado en regiones específicas. En ambos países, la heterogeneidad en la provisión de servicios y la fragmentación territorial han creado vacíos de poder que han sido ocupados por actores ilegales, exacerbando la violencia

y la vulnerabilidad de las poblaciones. En México, la expansión del crimen organizado ha prosperado en contextos de debilitamiento estatal, donde la falta de presencia gubernamental ha facilitado la operación de carteles en varias regiones (Astorga y Shirk, 2010). De manera similar, en Colombia, la violencia asociada con grupos armados ilegales ha sido alimentada por la falta de acceso a servicios esenciales y la debilidad de las instituciones en áreas rurales, dejando a las comunidades atrapadas en un ciclo de violencia y pobreza (González, 2014). Ambos casos muestran que la inseguridad no solo es una consecuencia de factores externos, sino también de fallas estructurales dentro del propio Estado.

En síntesis, la pobreza y desigualdad en el Ecuador debe analizarse desde determinantes estructurales que se reflejan en determinados territorios y grupos de personas, en función de las estructuras económica, social e institucional, que se interrelacionan y reproducen el empobrecimiento desde una economía extractivista, dependiente e informal, la exclusión social sistemática y la debilidad institucional, lo que además permite las condiciones propicias para el surgimiento de dinámicas de violencia. A continuación, se analiza este planteamiento.

Metodología

Las condiciones del empobrecimiento y la desigualdad socioeconómica en el Ecuador se analizan para el periodo 2019-2023, siendo un lustro en el cual se han presentado una serie de factores que dan cuenta de los procesos de reproducción de la pobreza y la desigualdad tanto en el ámbito político-institucional que marca el rol económico y de planificación del Estado, cuanto, en la presencia y acción de grupos de delincuencia organizada, y en el impacto de la pandemia de la COVID-19. Siendo estos elementos internos y externos frente a los cuales se muestran las interacciones entre pobreza, desigualdad, institucionalidad (inseguridad) y la estructura económica y social del país.

Estos factores se influyen mutuamente y además afectan de manera heterogénea a diferentes territorios y grupos poblacionales. Estas relaciones son presentadas y analizadas en este estudio mediante dos estrategias complementarias:

1. Análisis descriptivo de indicadores sociales, económicos y de seguridad a nivel territorial, durante el período 2019-2023, utilizando fuentes oficiales.
2. Evaluación de la relación entre pobreza, inseguridad y estructura económica, mediante un modelo econométrico utilizando una base de datos de panel a nivel territorial.

La información que se utiliza proviene de fuentes oficiales, siendo estas, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) desde la Encuesta Nacional de

Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) y la Matriz de Femicidios, que proporcionan información detallada sobre variables sociales y económicas; el Ministerio del Interior (MDI) para obtener datos relacionados con la criminalidad y seguridad pública; y el Banco Central del Ecuador en cuanto a estadísticas económicas.

Las variables e indicadores constan en la siguiente tabla:

Tabla 1

Variables e indicadores

Dimensión	Variable	Indicadores
Social	Pobreza	Prevalencia de pobreza por ingresos. Prevalencia de pobreza multidimensional.
	Desigualdad	Índice de desigualdad de Gini por ingresos.
	Servicios públicos	Tasa de asistencia a educación superior. Tasa de embarazo infantil.
	Demográficos	Autoidentificación étnica
Económico	Trabajo	Cobertura de seguridad social.
	Producción y consumo	Valor Agregado Bruto (VAB).
	Estructura económica	Sectorización del empleo.
Institucional	Seguridad	Tasa de homicidios.

Para el análisis descriptivo, se realizarán cruce de indicadores de la situación económica y de los problemas sociales y de violencia en los diferentes territorios. Por su parte, para el modelo econométrico todas las variables utilizadas fueron normalizadas para mitigar las distorsiones derivadas de la heterogeneidad entre las provincias.

Los indicadores de prevalencia de pobreza por ingresos y de pobreza multidimensional fueron obtenidos a partir de indicadores tabulados de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU), utilizando la metodología del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) y con un procesamiento propio para desagregarlo por provincias.

En cuanto a la tasa neta de asistencia a la educación superior, el porcentaje de población autoidentificada como blanca o mestiza, el porcentaje de empleo en el sector primario (agrícola, minas y petróleo) y la cobertura de seguridad social, se aplicó la misma metodología del INEC y se realizó un procesamiento propio desagregado por provincias.

Por otra parte, la tasa de homicidios intencionales (cada 10 000 habitantes) fue tabulada a partir de la base de datos de Homicidios Intencionales del Ministerio del

Interior (MDI). Es importante señalar que la categoría de homicidios intencionales incluye muertes por sicariato, feminicidio, otros homicidios y asesinatos. El coeficiente de Gini fue obtenido de los tabulados presentados por el INEC en la ENEMDU acumulada anual. La tasa de embarazo infantil (cada 1000 niñas) se obtuvo a partir del registro administrativo de Nacidos Vivos y Defunciones Fetales del INEC, que incluye casos de niñas entre 10 y 14 años. Finalmente, el valor agregado bruto por habitante fue obtenido de las cuentas regionales presentadas por el Banco Central del Ecuador (BCE).

Para la evaluación de las relaciones entre las diferentes dimensiones, se emplea una estrategia de regresiones territoriales con el fin de explorar tanto correlaciones como relaciones causales. En este sentido, se ajustarán ocho modelos de regresión, utilizando diversas variables dependientes y metodologías. Previamente, todas las variables han sido normalizadas para mitigar las distorsiones derivadas de la heterogeneidad entre las provincias.

El objetivo de este texto académico es identificar las relaciones causales entre la pobreza y la desigualdad con factores económicos, sociales e institucionales. En el primer modelo, la variable endógena es la incidencia de pobreza por ingresos. Dado que esta es una variable continua, se aplica el método de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO).

$$(1) \quad y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \dots + \beta_k x_k + u$$

En la ecuación (1), las variables independientes están representadas por un conjunto de regresores que reflejan factores económicos, sociales e institucionales que influyen en la pobreza. Sin embargo, el uso del método de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) puede generar problemas de endogeneidad y sesgo en los coeficientes. Estos problemas surgen, en parte, por la presencia de factores no observables (o no medibles) incluidos en el término de error, los cuales están correlacionados con las variables explícitas del modelo. En términos más simples, esto representa endogeneidad causada por la omisión de variables relevantes.

Para abordar los problemas derivados de las variables omitidas, se utiliza el método de Mínimos Cuadrados en Dos Etapas (MC2E), que requiere el uso de una variable instrumental con el fin de eliminar la endogeneidad del regresor. En este contexto, el modelo (2), con la misma variable dependiente, utiliza el método MC2E junto con la variable instrumental “Puerto Marítimo”. Esta variable, de naturaleza binaria, toma el valor de 1 si la provincia en cuestión cuenta con un puerto marítimo. Así, la variable instrumental controla la endogeneidad en la tasa de homicidios, la cual puede estar influenciada por factores no observados, como aspectos culturales o psicológicos, específicos de cada provincia y asociados a dicha tasa.

$$(2) \hat{x}_1 = \pi_0 + \pi_1 Z + v$$

$$(3) y = \beta_0 + \beta_1 \hat{x}_1 + \beta_2 x_2 + \dots + \beta_k x_k + u$$

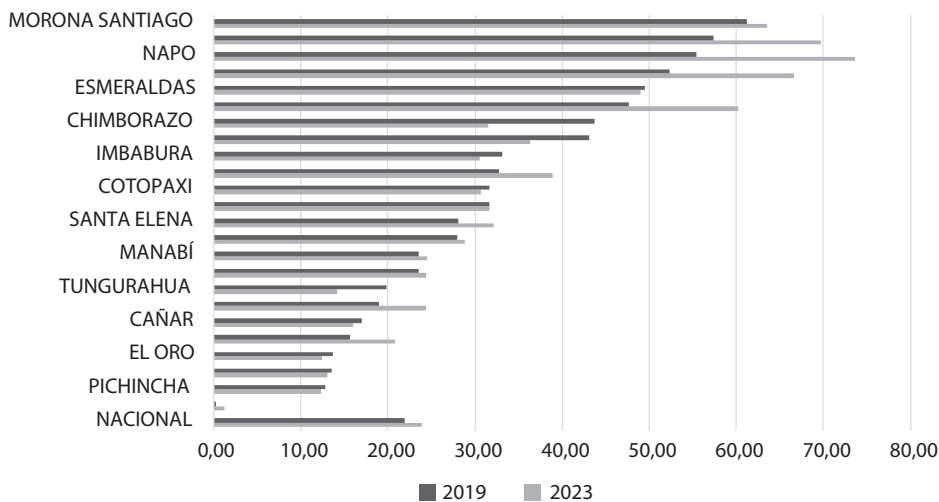
En este contexto, la ecuación (2) corresponde a la primera etapa de la regresión, donde se utiliza la variable instrumental Z , representada por la variable binaria “Puerto Marítimo”, para corregir la endogeneidad en la tasa de homicidios (medida por cada 10 000 habitantes). En la segunda etapa, representada por la ecuación (3), se emplean los valores predichos de la primera etapa en la regresión original, permitiendo obtener estimaciones consistentes para los parámetros del modelo.

Resultados

El análisis descriptivo de la pobreza por ingresos muestra que las provincias con mayor incidencia son Morona Santiago (61,24 % en 2019 y 63,58 % en 2023), Napo (55,38 % en 2019 y 73,58 % en 2023), Esmeraldas (49,45 % en 2019 y 49,05 % en 2023), Chimborazo (43,75 % en 2019 y 31,53 % en 2023) e Imbabura (33,10 % en 2019 y 30,55 % en 2023). Entre 2019 y 2023, estas provincias muestran una tendencia preocupante, ya que en la mayoría de los casos se observa un incremento en el porcentaje de personas que viven en pobreza por ingresos, especialmente en Napo, donde el aumento es significativo, pasando de 55,38 % a 73,58 % durante este período. Estos datos reflejan una persistencia de la pobreza en las provincias más afectadas, indicando la necesidad de políticas públicas más focalizadas para abordar las disparidades regionales.

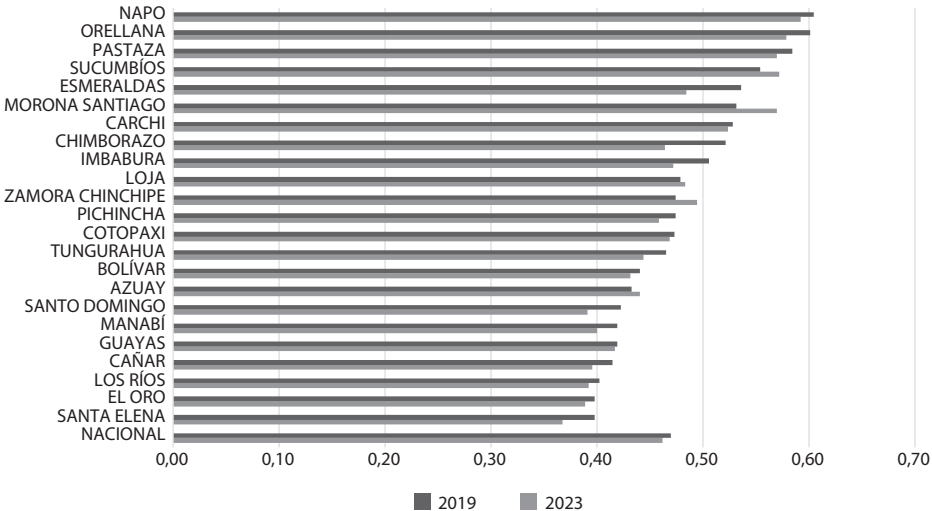
El análisis de los datos del coeficiente de Gini en las provincias de Ecuador revela que las mayores desigualdades se encuentran en las provincias de Napo (0,60 en 2019 a 0,59 en 2023), Orellana (0,60 en 2019 a 0,58 en 2023) y Pastaza (0,58 en 2019 a 0,57 en 2023). A pesar de una ligera disminución en algunas provincias, como Orellana y Pastaza, los niveles de desigualdad se mantienen altos. Además, Morona Santiago y Sucumbíos muestran un incremento en sus niveles de desigualdad, alcanzando un coeficiente de 0,57 en 2023, lo que refleja un agravamiento en la distribución desigual de ingresos en estas zonas. En comparación, provincias como Santa Elena, El Oro y Los Ríos presentan coeficientes de Gini más bajos, con valores entre 0,37 y 0,39 en 2023, lo que indica una menor desigualdad en estas áreas. A nivel nacional, el coeficiente de Gini ha mostrado una tendencia a la estabilidad, pasando de 0,47 en 2019 a 0,46 en 2023, sin cambios significativos en la distribución de los ingresos a nivel país.

Gráfico 1
Pobreza por ingresos (porcentaje), 2019-2023



Nota. Elaboración propia a partir de datos de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo-ENEMDU del Instituto Nacional de Estadística y Censos (2019-2023).

Gráfico 2
Índice de Gini, 2019-2023

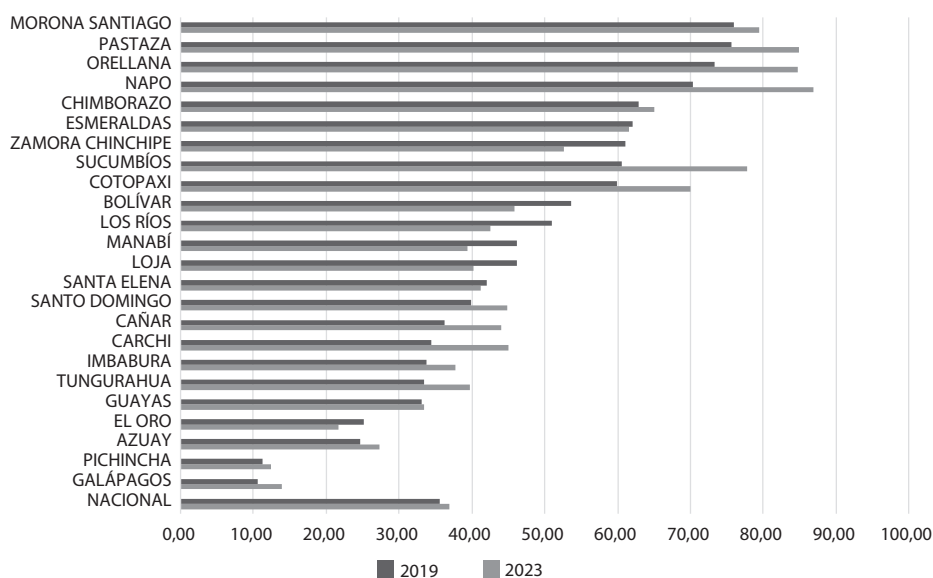


Nota. Elaboración a partir de datos de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo-ENEMDU del Instituto Nacional de Estadística y Censos (2019-2023).

Entre 2019 y 2023, la pobreza multidimensional en Ecuador mostró variaciones importantes. A nivel nacional, el porcentaje de pobreza multidimensional disminuyó ligeramente, pasando de 35,62 % en 2019 a 36,92 % en 2023. Sin embargo, algunas provincias registraron aumentos significativos. Napo destaca por ser la más afectada, con un incremento alarmante del 70,39 % en 2019 al 86,96 % en 2023. Orellana y Pastaza también experimentaron aumentos notables, pasando de 73,34 % a 84,67 % y de 75,60 % a 84,93 %, respectivamente. En contraste, provincias como Pichincha y El Oro mostraron una mejora, reduciendo sus niveles de pobreza multidimensional de 11,25 % a 12,48 % en el caso de Pichincha y de 25,20 % a 21,67 % en El Oro. Estos contrastes reflejan la disparidad territorial en la lucha contra la pobreza multidimensional en Ecuador, donde algunas provincias han logrado avances, mientras que otras continúan enfrentando un deterioro considerable.

Gráfico 3

Tasa de pobreza multidimensional (porcentaje), 2019-2023



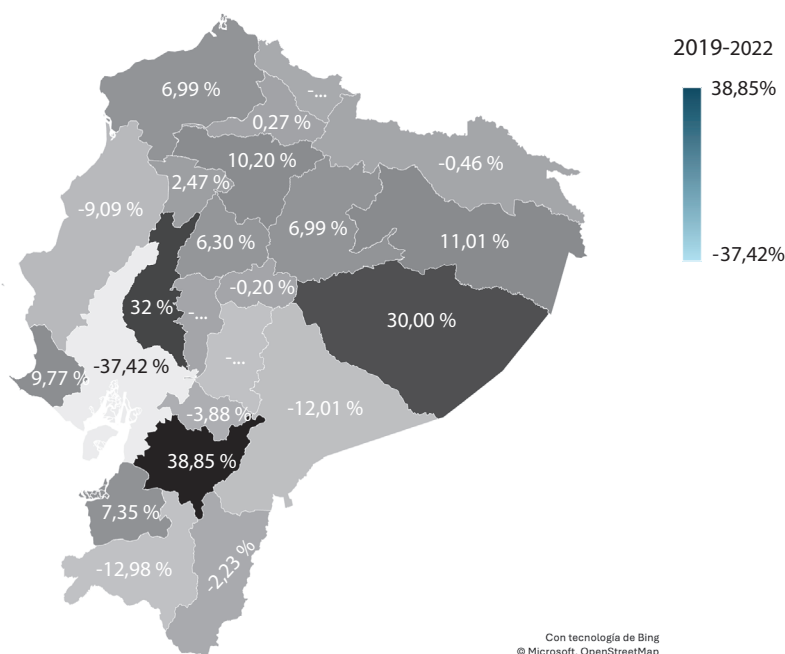
Nota. Elaboración propia a partir de datos de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo-ENEMDU del Instituto Nacional de Estadística y Censos (2019-2023).

Entre 2019 y 2022, la tasa de variación del valor agregado bruto (VAB) per cápita a nivel nacional aumentó un 7,31 %, aunque las provincias experimentaron comportamientos heterogéneos. Azuay (38,85 %) y Pastaza (30,00 %) lideraron el

crecimiento, seguidas por Orellana (11,01 %) y Pichincha (10,20 %), mientras que Guayas (-37,42 %) y Loja (-12,98 %) presentaron las mayores caídas. Provincias como Chimborazo, Morona Santiago, y Zamora Chinchipe también sufrieron retrocesos importantes. Algunas provincias, como Imbabura (0,27 %) y Santo Domingo de los Tsáchilas (2,47 %), mostraron un crecimiento moderado, lo que evidencia la gran disparidad en la evolución económica territorial durante este periodo.

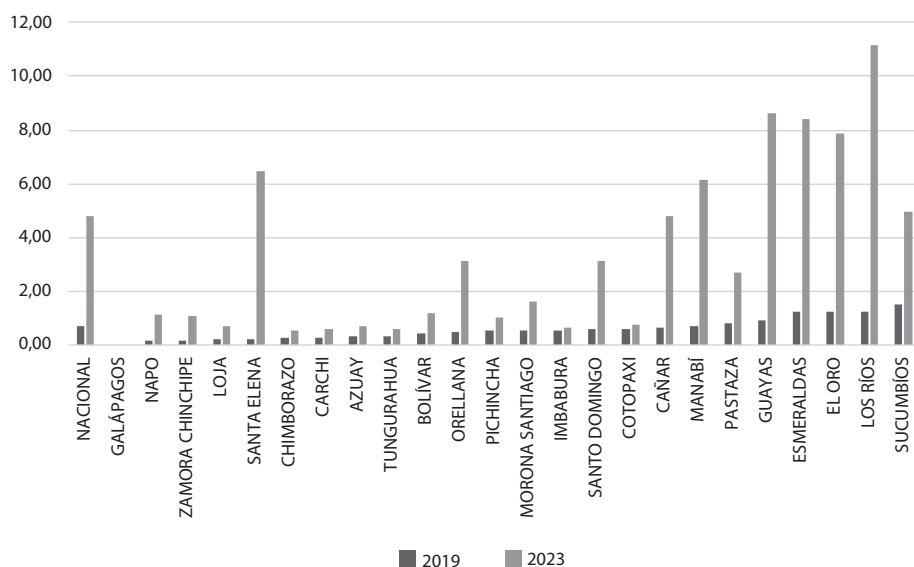
Gráfico 4

Tasa de variación del Valor Agregado Bruto (VAB) per cápita, 2019-2022



Nota. Elaboración a partir de datos del Banco Central del Ecuador (2019-2022).

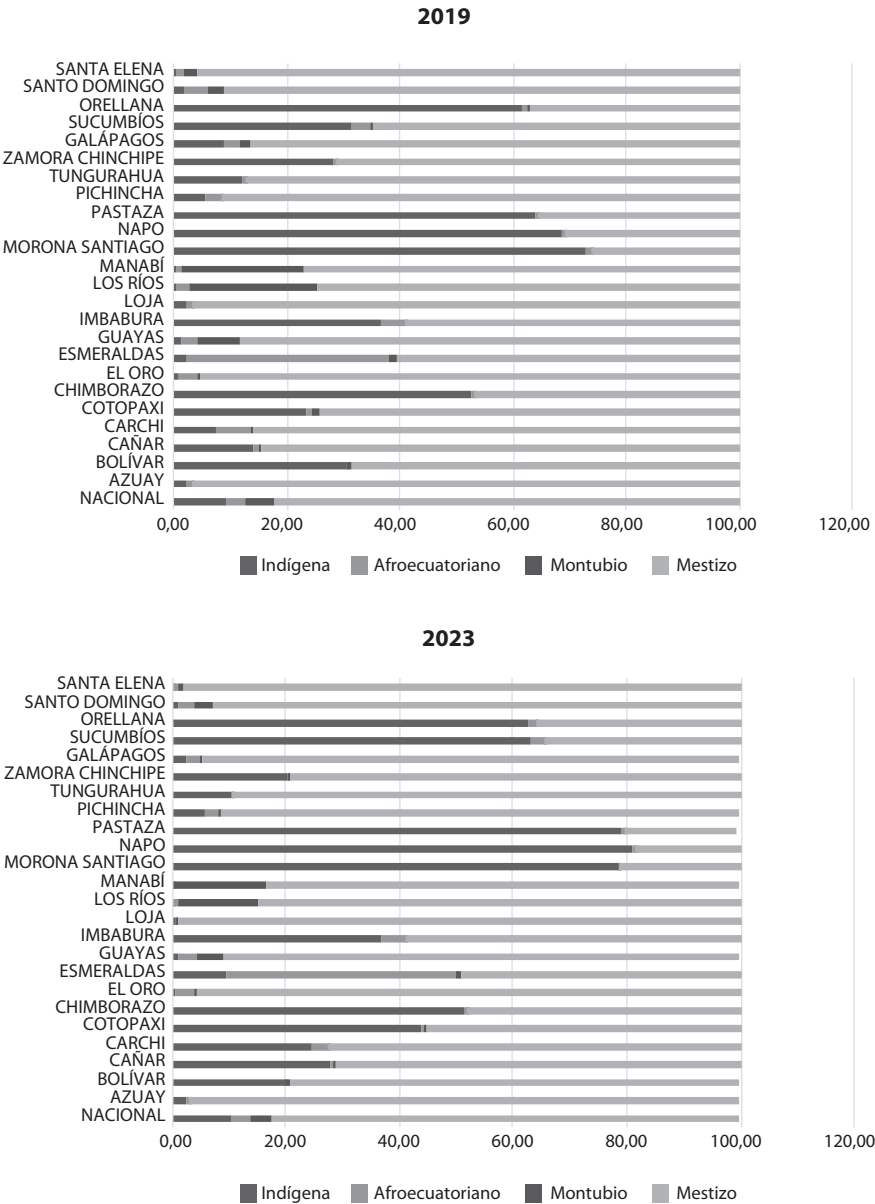
Entre 2019 y 2023, los homicidios intencionales en Ecuador aumentaron significativamente, pasando de 0,70 a 4,79 por cada 10 000 habitantes a nivel nacional. Provincias como Los Ríos, Esmeraldas, y Guayas experimentaron los incrementos más alarmantes, alcanzando 11,15, 8,40 y 8,63 respectivamente en 2023. Manabí también presentó un aumento considerable, pasando de 0,72 a 6,16 en el mismo período. En contraste, provincias como Galápagos mantuvieron tasas muy bajas o nulas de homicidios. Este aumento generalizado refleja una tendencia preocupante hacia un mayor nivel de violencia en varias regiones del país.

Gráfico 5*Homicidios intencionales (tasa por cada 10 000 habitantes), 2019-2023*

Nota. Elaboración a partir de datos del Ministerio del Interior (2019-2023).

Entre 2019 y 2023, la composición étnica de las provincias en Ecuador mostró algunos cambios notables. A nivel nacional, el porcentaje de población indígena creció del 9,17 % al 10,51 %, mientras que el mestizo mantuvo una proporción elevada, aunque con una ligera disminución, pasando de 82,09 % a 81,78 %. En provincias como Cotopaxi y Chimborazo, la población indígena aumentó considerablemente, de 23,71 % a 44 % en Cotopaxi y manteniéndose por encima del 50 % en Chimborazo. Por otro lado, la población afroecuatoriana se mantuvo estable a nivel nacional (3,42 % en 2019 frente a 3,26 % en 2023), con aumentos importantes en provincias como Esmeraldas, que pasó de 35,84 % a 40,35 %. El grupo mestizo sigue siendo dominante en la mayoría de las provincias, con regiones como Pichincha y Guayas registrando más del 89 % en 2023. En contraste, la población montubia disminuyó en varias provincias, como Los Ríos y Manabí, donde pasó de 22,49 % a 14,03 % y de 21,55 % a 16,4 %, respectivamente. Estos cambios reflejan una dinámica étnica en constante evolución en el país.

Gráfico 6
Composición étnica (porcentaje), 2019-2023

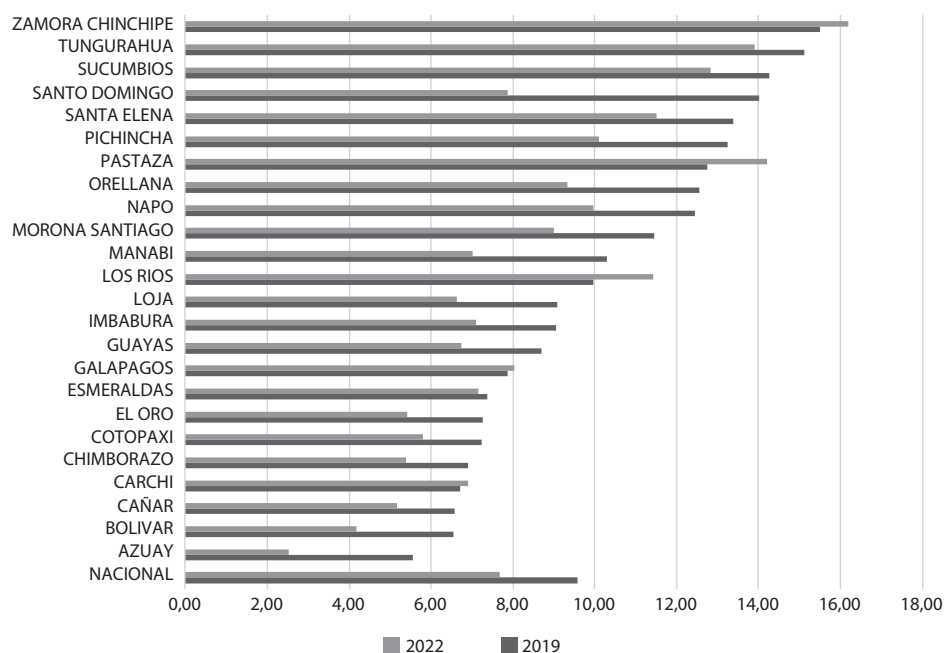


Nota. Elaboración a partir de datos de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo-ENEMDU del Instituto Nacional de Estadística y Censos (2019-2023).

Entre 2019 y 2022, la tasa de embarazo adolescente en Ecuador ha mostrado una tendencia a la disminución a nivel nacional, pasando de 9,59 a 7,68 embarazos por cada 1000 niñas. Sin embargo, algunas provincias han presentado aumentos preocupantes. Napo es la provincia con la mayor tasa, incrementándose de 12,75 en 2019 a 14,21 en 2022. Morona Santiago también se destaca, manteniendo niveles elevados, con 15,49 en 2019 y 16,20 en 2022. Por otro lado, provincias como Galápagos y Pichincha han logrado reducir significativamente sus tasas, con Galápagos pasando de 5,56 a 2,53 y Pichincha de 6,54 a 4,18 en el mismo período. A pesar de las reducciones observadas a nivel general, sigue existiendo una disparidad considerable entre las distintas provincias, lo que refleja la necesidad de políticas diferenciadas para abordar esta problemática en los territorios más afectados.

Gráfico 7

Embarazo infantil (tasa cada 1000 niñas), 2019-2022



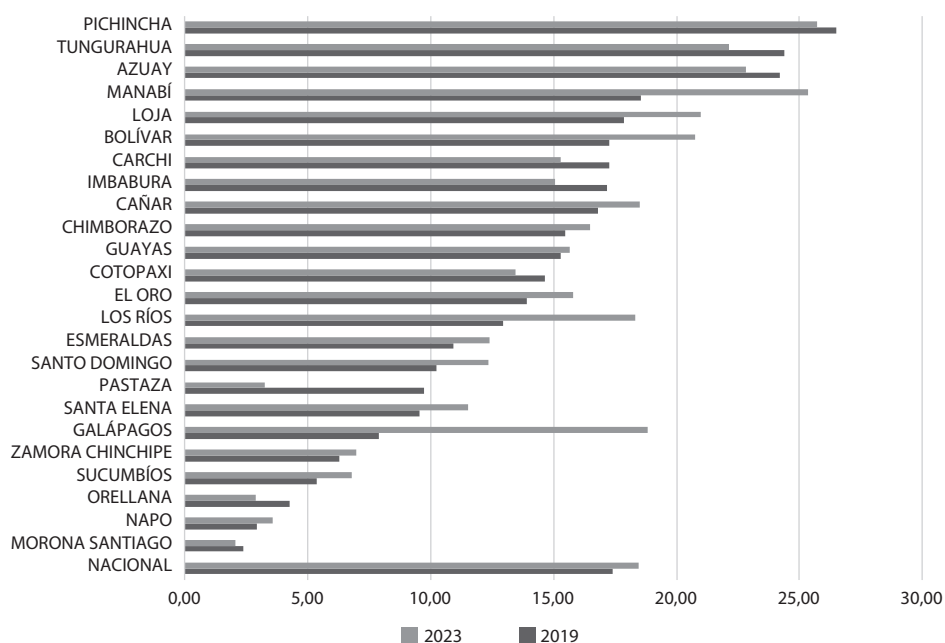
Nota. Elaboración a partir de datos de las estadísticas de Nacidos Vivos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (2019-2023).

Entre 2019 y 2023, la tasa neta de asistencia a la educación superior en Ecuador, que es la relación porcentual entre el número de personas matriculadas en un deter-

minado nivel educativo y con la edad oficial correspondiente a ese nivel, respecto a la población total de ese grupo etario, mostró un ligero aumento a nivel nacional, de 17,41 % a 18,44 %. Provincias como Morona Santiago (2,06 %), Napo (3,58 %) y Orellana (2,89 %) registraron en 2023 las tasas más bajas, lo que refleja limitaciones importantes en el acceso a la educación superior. Por otro lado, Manabí alcanzó una tasa de 25,34 %, lo que representa una mejora significativa en comparación con 2019. Pichincha y Azuay se posicionaron entre las provincias con mayores tasas, con 25,71 % y 22,82 % respectivamente, lo que evidencia las persistentes disparidades territoriales en el acceso a la educación superior.

Gráfico 8

Tasa de asistencia a educación superior (porcentaje), 2019-2023



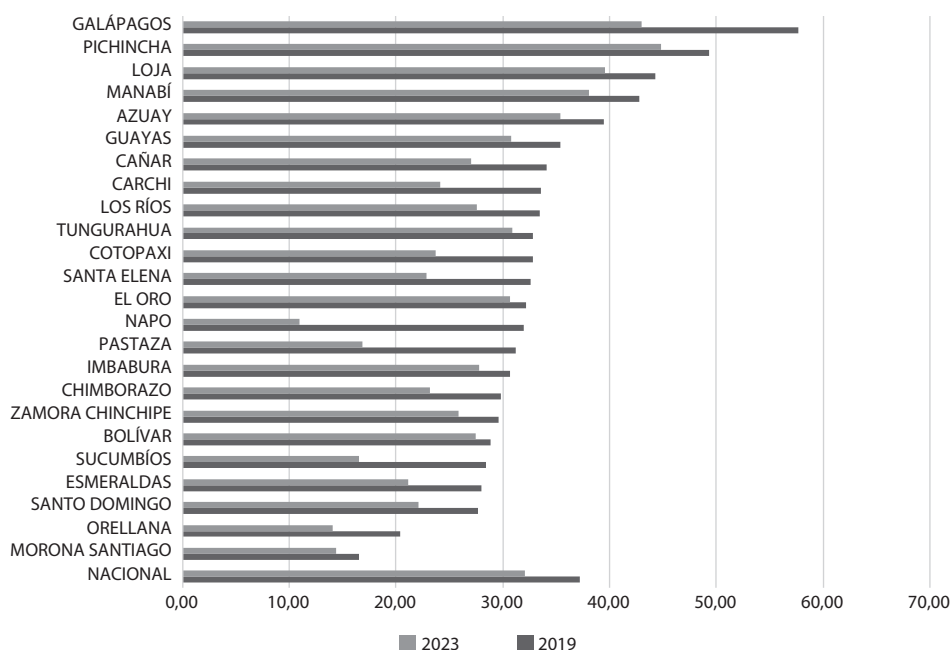
Nota. Elaboración a partir de datos de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo-ENEMDU del Instituto Nacional de Estadística y Censos (2019-2023).

Entre 2019 y 2023, el acceso a la seguridad social en Ecuador a nivel nacional disminuyó de 37,18 % a 32,03 %. A nivel provincial, se observaron grandes disparidades. Provincias como Morona Santiago (16,52 % en 2019 a 14,36 % en 2023) y Orellana (20,42 % en 2019 a 14,10 % en 2023) muestran una disminución significativa en el

acceso. En contraste, Pichincha y Loja se mantuvieron como las provincias con mejor acceso a la seguridad social en 2023, con 44,85 % y 39,57 % respectivamente, aunque también experimentaron leves caídas en comparación con 2019. Por otro lado, provincias como Galápagos, a pesar de una disminución desde 2019, mantuvo uno de los niveles más altos de acceso con 42,96 % en 2023. Estos datos reflejan una creciente desigualdad en el acceso a la seguridad social entre las distintas provincias del país.

Gráfico 9

Acceso a seguridad social (porcentaje), 2019-2023



Nota. Elaboración a partir de datos de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo-ENEMDU del Instituto Nacional de Estadística y Censos (2019-2023).

El análisis de los determinantes de la pobreza por ingresos y multidimensional en Ecuador para el período 2019-2023 revela patrones estructurales importantes. Las estimaciones, realizadas mediante modelos de regresión territorial con variables normalizadas, permiten identificar el impacto de distintas dimensiones institucionales, sociales y económicas sobre la pobreza. A continuación, se presentan los resultados en dos secciones: primero, los modelos que explican la pobreza por ingresos, seguidos de aquellos que analizan la pobreza multidimensional.

En los modelos que explican la pobreza por ingresos (Modelos I y II), uno de los resultados más relevantes es el impacto de la desigualdad de ingresos, medida a través del coeficiente de Gini. Un incremento de una desviación estándar en la desigualdad de ingresos se asocia con un incremento de 0,3161 desviaciones estándar en la pobreza por ingresos (Modelo I). Este resultado indica que en las provincias donde la desigualdad de ingresos es más alta, se espera un aumento proporcional en la pobreza por ingresos, lo cual pone de relieve la relación estructural entre la concentración de ingresos y el empobrecimiento. En términos prácticos, esto implica que las políticas que no aborden directamente la desigualdad tendrán un impacto limitado en la reducción de la pobreza, ya que la distribución del ingreso sigue siendo un determinante clave.

La tasa de embarazo infantil, como proxy de la falta de promoción de la salud y oportunidades para las mujeres jóvenes, tiene un impacto positivo en el Modelo I. Un aumento de una desviación estándar en esta variable se traduce en un incremento de 0,1321 desviaciones estándar en la pobreza por ingresos. Este hallazgo revela la interrelación entre la salud reproductiva y la pobreza, destacando que las provincias con mayores tasas de embarazo infantil tienden a experimentar niveles más altos de pobreza por ingresos.

En cuanto a la cobertura de seguridad social, los coeficientes negativos en los Modelos I y II (respectivamente -0,3799 y -0,5213) indican que un aumento de una desviación estándar en la cobertura de seguridad social reduce la pobreza por ingresos en 0,3799 y 0,5213 desviaciones estándar, respectivamente. Estos resultados subrayan el papel crucial que desempeña la protección social en mitigar la pobreza, ya que las provincias con mayor acceso a la seguridad social tienen menores niveles de pobreza. Esto implica que, en las regiones donde se promueven sistemas de protección social más robustos, se observan mejoras significativas en las condiciones de vida de la población, lo que confirma la importancia del Estado de bienestar en la reducción de la vulnerabilidad económica.

El Valor Agregado Bruto (VAB) por habitante no presenta un impacto estadísticamente notable en los modelos de pobreza por ingresos, lo que sugiere que el crecimiento económico por sí solo no es suficiente para reducir la pobreza si no se acompaña de políticas redistributivas y de protección social. Este resultado es consistente con la idea de que el crecimiento económico no garantiza automáticamente una mejora en la distribución del bienestar, y que la desigualdad debe ser abordada de manera directa.

En cuanto a la inseguridad, si bien se observa una relación directa con la pobreza esta no es estadísticamente significativa en ninguna de las dos especificaciones, mostrando que existe una relación, pero que está condicionada además por otros factores territoriales o específicos de la acción del crimen organizado. En este sentido, una posible razón de la falta de significancia estadística es la presencia de territorios empobrecidos de la sierra centro y la Amazonía en donde es relativamente menor la presencia de grupos de delincuencia organizada en los años de análisis.

Tabla 2*Resultados de las regresiones territoriales para la pobreza por ingresos en Ecuador*

Especificación		(I)		(II)	
Variable dependiente (normalizada)		Pobreza por ingresos			
Unidad		Provincia		Provincia	
Años		2019 a 2023		2019 a 2023	
Modelo		Lineal		Lineal IV	
Instrumento				Puerto marítimo	
Número de observaciones		120		120	
R^2		0,9799		0,904	
Variables independientes (normalizadas)					
Razón de homicidios intencionales		0,0635		0,2023	
		(0,0393)		(0,3115)	
Coeficiente de Gini para desigualdad de ingreso		0,3161	***	0,5127	***
		(0,0841)		(0,1275)	
Tasa neta de asistencia a educación superior					
Porcentaje de población autoidentificada como blanca o mestiza					
Tasa de embarazo infantil		0,1321	**	0,0884	
		(0,0650)		(0,0865)	
Valor Agregado Bruto por habitante		0,1426		-0,0692	
		(0,1816)		(0,0588)	
Porcentaje de empleo en el sector primario (agrícola, minas y petróleos)		0,0490		0,1600	
		(0,0390)		(0,0976)	
Cobertura de seguridad social		-0,3799	***	-0,5213	***
		(0,0862)		(0,1790)	

Nota. Elaboración propia a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos, Servicios de Rentas Internas, Secretaría Nacional de Planificación, Ministerio del Interior y Banco Central del Ecuador. Los coeficientes son interpretados en términos de desviaciones estándar. Los valores de significancia están indicados de la siguiente manera: $p < 0.1$ (*), $p < 0.05$ (**), $p < 0.01$ (***), correspondientes a valores críticos de 1.645, 1.960 y 2.576, respectivamente.

En los modelos que explican la pobreza multidimensional (Modelos III a VIII), se observa un patrón similar en cuanto al impacto de la desigualdad y la seguridad social, pero con algunas diferencias importantes en el comportamiento de otras variables.

Tabla 3

Resultados de las regresiones territoriales para la pobreza por multidimensional en Ecuador (Modelo III a V)

Especificación	(III)		(IV)		(V)	
Variable dependiente (normalizada)	Pobreza multidimensional					
Unidad	Provincia		Provincia		Provincia	
Años	2019 a 2023		2019 a 2023		2019 a 2023	
Modelo	Lineal		Lineal IV		Efectos fijos	
Instrumento			Puerto marítimo			
Número de observaciones	120		120		120	
R^2	0,984		0,844		0,7681	
Variables independientes (normalizadas)						
Razón de homicidios intencionales	-0,094	*	0,179		-0,094	**
	0,050		0,422		0,044	
Coeficiente de Gini para desigualdad de ingreso	0,107	*	0,228		0,107	**
	0,061		0,145		0,054	
Tasa neta de asistencia a educación superior						
Porcentaje de población autoidentificada como blanca o mestiza						
Tasa de embarazo infantil	0,109		0,137		0,109	*
	0,074		0,141		0,066	
Valor Agregado Bruto por habitante	0,124		0,066		0,124	
	0,150		0,087		0,134	
Porcentaje de empleo en el sector primario (agrícola, minas y petróleos)	0,034		0,465	***	0,034	
	0,060		0,112		0,053	
Cobertura de seguridad social	-0,428	***	-0,443	***	-0,428	***
	0,115		0,171		0,102	

Nota. Elaboración a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos, Servicios de Rentas Internas, Secretaría Nacional de Planificación, Ministerio del Interior y Banco Central del Ecuador. Los coeficientes son interpretados en términos de desviaciones estándar. Los valores de significancia están indicados de la siguiente manera: $p < 0.1$ (*), $p < 0.05$ (**), $p < 0.01$ (***), correspondientes a valores críticos de 1 645, 1 960 y 2 576, respectivamente.

La desigualdad de ingresos, medida nuevamente a través del coeficiente de Gini, muestra un efecto positivo en los Modelos V y VI (0,1069 y 0,1624 desviaciones estándar, respectivamente). Un aumento de una desviación estándar en la desigualdad de ingresos se asocia con un aumento correspondiente en la pobreza multidimensional. Este hallazgo refuerza la idea de que las provincias con mayores desigualdades no solo enfrentan mayores niveles de pobreza por ingresos, sino que también están afectadas en múltiples dimensiones del bienestar. Es decir, la desigualdad no solo impacta los ingresos, sino que se extiende a otras áreas como el acceso a la educación, la salud y la vivienda, exacerbando las privaciones múltiples que caracterizan la pobreza multidimensional.

La tasa de asistencia neta a la educación superior tiene un coeficiente negativo en el Modelo VII (-0,1895 desviaciones estándar), lo que sugiere que un aumento en la cobertura educativa se traduce en una reducción significativa de la pobreza multidimensional. La educación es un factor clave para mejorar las capacidades de las personas y su capacidad para salir de la pobreza. Las provincias con mayores tasas de acceso a la educación superior tienen menores niveles de pobreza multidimensional.

En el porcentaje de empleo en el sector primario (Modelos VII y VIII), un aumento de una desviación estándar en esta variable se asocia con un incremento de 0,4648 desviaciones estándar en la pobreza multidimensional (Modelo VIII). Este resultado revela que las provincias con una mayor concentración de empleo en sectores primarios (agricultura, ganadería, pesca y silvicultura) tienden a experimentar mayores niveles de pobreza multidimensional. Esto es consistente con la baja productividad y la precariedad laboral que suelen caracterizar a estos sectores, los cuales no generan empleos de calidad ni oportunidades de desarrollo sostenibles.

La cobertura de seguridad social sigue siendo un determinante clave en todos los modelos de pobreza multidimensional, con coeficientes negativos que oscilan entre -0,4279 y -0,4646 desviaciones estándar en los Modelos V a VII. Esto confirma que el acceso a la seguridad social actúa como un amortiguador contra las privaciones múltiples. Las provincias con mayor cobertura de seguridad social tienden a tener niveles más bajos de pobreza multidimensional, lo que pone de manifiesto la importancia de fortalecer los sistemas de protección social, especialmente en contextos donde la informalidad laboral es alta.

Finalmente, el porcentaje de población autoidentificada como blanca o mestiza muestra un coeficiente negativo y significativo al 99 % en el Modelo VIII (-0,4783***). Esto indica que las provincias con un mayor porcentaje de población autoidentificada como blanca o mestiza tienden a tener menores niveles de pobreza multidimensional. Este hallazgo pone de relieve cómo la etnicidad sigue siendo un factor importante en la distribución de las oportunidades económicas y el acceso a servicios, confirmando la

persistencia de discriminaciones estructurales que afectan a las poblaciones indígenas y afrodescendientes, quienes sufren mayores niveles de pobreza multidimensional.

Tabla 4

Resultados de las regresiones territoriales para la pobreza por multidimensional en Ecuador (Modelo VI a VIII)

Especificación	(VI)		(VII)		(VIII)	
Variable dependiente (normalizada)	Pobreza multidimensional					
Unidad	Provincia		Provincia		Provincia	
Años	2019 a 2023		2019 a 2023		2019 a 2023	
Modelo	Efectos aleatorios		Efectos fijos		Efectos fijos	
Instrumento						
Número de observaciones	120		120		120	
R^2	0,8243		0,759		0,7977	
Variables independientes (normalizadas)	Variables independientes (normalizadas)					
Razón de homicidios intencionales	-0,086	**	-0,072	**	-0,091	***
	0,042		0,036		0,030	
Coeficiente de Gini para desigualdad de ingreso	0,162	**				
	0,064					
Tasa neta de asistencia a educación superior			-0,189	***		
			0,042			
Porcentaje de población autoidentificada como blanca o mestiza					-0,478	***
					0,056	
Tasa de embarazo infantil	0,173	***	0,051		0,051	
	0,059		0,061		0,049	
Valor Agregado Bruto por habitante	0,136		0,083		0,045	
	0,113		0,119		0,116	
Porcentaje de empleo en el sector primario (agrícola, minas y petróleos)	0,160	***	0,053		0,014	
	0,052		0,049		0,054	
Cobertura de seguridad social	-0,465	***	-0,434	***	-0,205	**
	0,097		0,107		0,088	

Nota. Elaboración a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos, Servicios de Rentas Internas, Secretaría Nacional de Planificación, Ministerio del Interior y Banco Central del Ecuador. Los coeficientes son interpretados en términos de desviaciones estándar. Los valores de significancia están indicados de la siguiente manera: $p < 0.1$ (*), $p < 0.05$ (**), $p < 0.01$ (***), correspondientes a valores críticos de 1.645, 1.960 y 2.576, respectivamente.

Los resultados muestran que la pobreza en Ecuador está estrechamente vinculada a factores estructurales como la desigualdad de ingresos, la cobertura de seguridad social y las disparidades étnicas. La desigualdad de ingresos y la falta de acceso a la seguridad social juegan un rol central en el aumento de la pobreza, mientras que las diferencias étnicas agravan las privaciones multidimensionales, afectando principalmente a las poblaciones indígenas, montuvias y afrodescendientes. Además, la concentración de empleo en sectores de baja productividad, como el sector primario, contribuye significativamente a los altos niveles de pobreza multidimensional en ciertas provincias.

Discusión y conclusiones

El análisis de la pobreza en Ecuador confirma que se trata de un fenómeno estructural profundamente enraizado, que afecta de manera diferenciada a determinados territorios y grupos poblacionales. Los resultados de este estudio destacan que la pobreza no puede ser vista como un problema coyuntural o exclusivamente económico, sino como una consecuencia de múltiples factores institucionales, sociales y económicos que interactúan para perpetuar las dinámicas de empobrecimiento en ciertas provincias y sectores de la población.

La desigualdad emerge como el factor determinante en la perpetuación de la pobreza. Esto es evidente en la fuerte correlación entre el coeficiente de Gini, que mide la desigualdad de ingresos, y los niveles de pobreza por ingresos y multidimensional. Las provincias con mayor desigualdad de ingresos presentan mayores tasas de empobrecimiento, lo que refleja cómo la concentración de riqueza exacerba las privaciones de las poblaciones más vulnerables (Piketty, 2014). Además, las disparidades en el acceso a la educación y las diferencias étnicas agravan aún más esta situación, afectando particularmente a las poblaciones indígenas, montuvias y afrodescendientes, quienes se enfrentan a una pobreza multidimensional más profunda. Ecuador es una sociedad altamente racializada, donde la desigualdad no solo es una cuestión de ingresos, sino que también se refleja en las oportunidades de acceso a servicios básicos y en las condiciones de vida de los grupos históricamente marginados. Esta desigualdad está profundamente territorializada, lo que significa que ciertas provincias y comunidades son mucho más vulnerables a la pobreza debido a su ubicación geográfica y composición étnica (Mideros *et al.*, 2024).

El acceso a la educación es otro factor clave en la reducción de la pobreza multidimensional. Un mayor acceso a la educación superior se asocia con menores niveles de pobreza, lo que subraya la importancia de mejorar las capacidades y oportunidades de la población más vulnerable (Sen, 1999). Además, la tasa de embarazo infantil, como proxy de la falta de promoción de salud, refuerza las brechas de género y afecta nega-

tivamente a las provincias con mayores tasas de embarazo, donde las mujeres jóvenes enfrentan mayores limitaciones para salir de la pobreza (UNFPA, 2020).

En términos económicos, la estructura productiva del país, caracterizada por la primarización de la economía, agrava las condiciones de pobreza. Las provincias con un mayor porcentaje de empleo en sectores primarios, como la agricultura, muestran niveles más altos de pobreza multidimensional, lo que refleja la baja productividad de estos sectores. El crecimiento económico, medido a través del Valor Agregado Bruto (VAB) por habitante, no tiene una relación clara con la reducción de la pobreza, lo que sugiere que el crecimiento económico por sí solo no es suficiente para mejorar las condiciones de vida si no se abordan las desigualdades estructurales.

Finalmente, el análisis de la pobreza en Ecuador revela que el problema no puede entenderse únicamente desde la perspectiva económica o coyuntural, sino como el resultado de profundas estructuras de desigualdad, discriminación y exclusión territorial que afectan de manera desproporcionada a poblaciones vulnerables. Estas dinámicas se ven agravadas por la falta de políticas sociales integrales y sostenidas, las cuales han sido fragmentadas y de corto plazo, respondiendo más a los ciclos económicos que a una visión de largo plazo sobre el bienestar. Como señalan Mideros y Sánchez (2024), las políticas sociales del país han reflejado la voluntad de los gobiernos de turno más que un proyecto integral de sociedad, lo que ha limitado su capacidad para reducir de manera significativa la pobreza y la desigualdad. Sin un enfoque sostenido que aborde las causas estructurales del empobrecimiento, como la concentración de la riqueza, la precariedad laboral y las disparidades territoriales y étnicas, los avances seguirán siendo parciales y temporales.

Referencias bibliográficas

- Acemoglu, D. y Robinson, J. (2012). *Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty*. Crown Publishers.
- Acosta, A. (2006). Efectos de la maldición de la abundancia de recursos naturales. En G. Fontaine, *Petróleo y desarrollo sostenible en Ecuador* (pp. 87-110). FLACSO-Ecuador.
- Arellano, M. (2022). *Sindicalismo para transformar el trabajo y la vida*. FES-Ecuador.
- Astorga, L. y Shirk, D. (2010). *Drug trafficking organizations and counter-drug strategies in the U.S.-Mexican context*. Center for U.S.-Mexican Studies.
- Banco Mundial. (2020). *Panoramas alimentarios futuros. Reimaginando la agricultura en América Latina y el Caribe*. Washington DC: Banco Mundial.
- Chant, S. (2010). Gendered poverty across space and time: Introduction and overview. En S. C. (ed.), *The International Handbook of Gender and Poverty: Concepts, Research, Policy* (pp. 1-26). Edward Elgar Publishing.
- Collier, P. (2007). *The Bottom Billion: Why the poorest countries are failing and what can be done about it*. Oxford University Press.

- Elson, D. (1999). Labor markets as gendered institutions: Equality, efficiency and empowerment issues. *World Development*, 27(3), 611-627.
- FAO. (s.f.). *FAO en Ecuador*. <https://bit.ly/40bjlW>
- Farmer, P. (2003). *Pathologies of power: Health, human rights, and the new war on the poor*. University of California Press.
- Federici, S. (2012). *Revolution at point zero: housework, reproduction, and feminist struggle*. PM Press.
- Fraser, N. (2013). *Fortunes of feminism: from state-managed capitalism to neoliberal crisis*. Verso Books.
- Galeano, E. (1971). *Las venas abiertas de América Latina*. Siglo XXI Editores.
- Galtung, J. (1990). Cultural violence. *Journal of Peace Research*, 27(3), 291-305.
- González, F. (2014). *Poder y violencia en Colombia*. Universidad Nacional de Colombia.
- INEC. (2019). *Encuesta Nacional sobre Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres -ENVIGMU*. INEC.
- INEC. (2022). *Registro Estadístico de Defunciones Generales*. INEC.
- INEC. (2023). *Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo. Anual*. INEC.
- Larrea, A. (2004). *El movimiento indígena ecuatoriano: participación y resistencia*. CLASCO.
- Larrea, C. (2014). *¿Existen alternativas frente al petróleo en la Amazonía Centro-sur?* Universidad Andina Simón Bolívar.
- Martínez, L. (2013). *La agricultura familiar en el Ecuador*. RIMISP.
- Massal, J. (2000). Movimientos sociales, democratización y multiculturalismo. En J. Massal, y M. B. (eds.), *Los movimientos sociales en las democracias andinas* (pp. 157-192). FLACSO-Ecuador.
- Mideros, A. y Fernández, N. (2021). *El bienestar como tarea pendiente en Ecuador: hacia nuevos pactos para garantizar la protección social universal*. FES-Ecuador.
- Mideros, A. y Sánchez, C. (2024). El bienestar y la pobreza multidimensional en el Ecuador entre 1980 y 2022. En A. Mideros, X. Jara y M. G. Palacio (eds.), *Política social, pobreza y desigualdad en el Ecuador: 1980-2021* (pp. 326-382). EdPUCE.
- Mideros, A., Fernández, N. y Sánchez, C. (2024). Brechas estructurales en el Ecuador: retos y transformaciones para el desarrollo. En d. y. Pobreza, Andrés Mideros; Oscar Martínez; Carolina Sánchez. EdPUCE.
- Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado. (2023). *Boletín anual de homicidios intencionales en Ecuador*. PADF.
- OMS. (marzo de 08 de 2021). *Violencia contra la mujer*. <https://bit.ly/3NAMINZ>
- Piketty, T. (2014). *Century, Capital in the Twenty-First*. Harvard University Press.
- Prebisch, R. (1950). *The economic development of Latin America and its principal problems*. United Nations.
- Sachs, J. y Andrew, W. (1995). *Natural Resource Abundance and Economic Growth*. National Bureau of Economic Research.
- Santillán, A. y Aguinaga, M. (2012). *El movimiento de las mujeres y feministas del Ecuador*. IEE.
- Sen, A. (1999). *Development as Freedom*. Oxford University Press.
- Stiglitz, J. (2013). *El precio de la desigualdad*. TAURUS.
- UNFPA. (2020). *Socioeconomic cosequences of adolescent pregnancy in six Latin American countries*. UNFPA.